



**PROCURADURIA  
GENERAL DE LA NACION**

## **AUTO 680 DE 2024**

**Referencia:** Archivo de Supervigilancia al Derecho de Petición (SDP) – Remisión a autoridad disciplinaria.

Bogotá, D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024).

El suscrito Procurador Auxiliar para Asuntos Constitucionales, en ejercicio de la facultad contemplada en el artículo 8.2 del Decreto Ley 262 de 2000, modificado por el artículo 3 del Decreto Ley 1851 de 2021, y

### **CONSIDERANDO**

1. Que el artículo 23 de la Constitución<sup>1</sup>, desarrollado por la Ley 1755 de 2015<sup>2</sup>, establece el derecho fundamental de petición, el cual ha sido definido como la prerrogativa que tienen los ciudadanos de presentar solicitudes respetuosas ante las autoridades y ciertos particulares, y la garantía consecuente de recibir respuesta a las mismas de forma oportuna, clara, precisa y congruente, independientemente de que se acceda o no a sus pretensiones<sup>3</sup>.
2. Que en el artículo 8.2 del Decreto Ley 262 de 2000, modificado por el artículo 3 del Decreto Ley 1851 de 2021<sup>4</sup>, se contempla la Supervigilancia al Derecho de Petición (SDP) como un procedimiento a cargo de la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Constitucionales.
3. Que, según la Resolución 029 de 2021<sup>5</sup> de la Procuraduría General de la Nación, la SDP consiste en un trámite administrativo sumario<sup>6</sup>, en el que se requiere a la autoridad o particular correspondiente para que atienda la solicitud de una persona en consonancia con los mandatos constitucionales y legales, so pena de remitir copia de

---

<sup>1</sup> “Artículo 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales”.

<sup>2</sup> “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

<sup>3</sup> Cfr. Corte Constitucional, Sentencias C-951 de 2014 (M.P. Martha Victoria Sánchez Méndez) y C-242 de 2020 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez).

<sup>4</sup> “Por el cual se modifica el artículo 8º del Decreto Ley 262 de 2000 (...)”. “Artículo 3º. Procuraduría Auxiliar para Asuntos Constitucionales. La Procuraduría Auxiliar para Asuntos Constitucionales tiene las siguientes funciones: (...) 2. Supervigilar y promover el cumplimiento de las disposiciones que regulan el derecho de petición”.

<sup>5</sup> “Por la cual se regula el trámite y desarrollo de la función preventiva y/o de intervención de Supervigilancia al Derecho Fundamental de Petición (...)”.

<sup>6</sup> Al respecto, cabe resaltar que al ser la Supervigilancia al Derecho de Petición un procedimiento donde sólo se profieren actos de trámite, las providencias emitidas dentro del mismo carecen de recursos según lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.



las actuaciones al operador disciplinario o administrativo competente a fin de que, si hay lugar a ello, investigue e imponga las sanciones del caso<sup>7</sup>.

4. Que, en este sentido, en el artículo 7° de la Resolución 029 de 2021 de la Procuraduría General de la Nación, se indica:

*(i) Que “si pese a la intervención del Grupo Especial de Supervigilancia al Derecho de Petición, la entidad pública o el particular omite el deber de dar contestación a la solicitud del peticionario, se remitirá copia de la actuación preventiva y/o de intervención a la dependencia o entidad que resulten competentes, a fin de que inicien las actuaciones disciplinarias a que haya lugar”; y*

*(ii) Que, en dicho evento, “se debe ilustrar al peticionario sobre el derecho que le asiste de perseguir la efectividad del derecho fundamental de petición a través de la interposición de la acción constitucional de tutela”.*

5. Que el artículo 2° de la Resolución 029 de 2021 señala que “el Grupo Especial de Supervigilancia al Derecho de Petición tendrá las siguientes funciones: (...) 8. Proferir respuestas a las solicitudes relacionadas con las funciones que ejerce”.

6. Que las personas que se relacionan en la parte resolutive de esta decisión acudieron ante la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Constitucionales a efectos de que se dispusiera la SDP frente a las solicitudes que presentaron ante las autoridades respectivas.

7. Que los requerimientos de SDP realizados por la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Constitucionales con ocasión de dichas solicitudes y que se relacionan en la parte resolutive de esta decisión no han sido atendidos, desconociéndose los mandatos legales, por lo que:

*(i) Se procederá a remitir copias de las diligencias de SDP correspondientes a las entidades para que, por medio de los canales institucionales respectivos, sean asignadas a las dependencias competentes para iniciar las acciones disciplinarias y/o administrativas a las que haya lugar, según lo dispone el artículo 31 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo<sup>8</sup>;*

<sup>7</sup> Sobre el particular, el artículo 31 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece que “la falta de atención a las peticiones y a los términos para resolver, la contravención a las prohibiciones y el desconocimiento de los derechos de las personas de que trata esta Parte Primera del Código, constituirán falta para el servidor público y darán lugar a las sanciones correspondientes de acuerdo con el régimen disciplinario”. A su vez, el parágrafo 3° del artículo 32 *ibídem* señala que “ninguna entidad privada podrá negarse a la recepción y radicación de solicitudes y peticiones respetuosas, so pena de incurrir en sanciones y/o multas por parte de las autoridades competentes”.

<sup>8</sup> Al respecto, se resalta que el artículo 2.2.3.1.1.2. del Decreto 1069 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho”, establece que: “se entenderá que no se encuentra amenazado un derecho constitucional fundamental por el sólo hecho de que se abra o adelante una investigación o averiguación administrativa por la autoridad competente con sujeción al procedimiento correspondiente regulado por la ley”.



- (ii) Se informará a los peticionarios que tienen la posibilidad de interponer acciones de tutela en contra de las entidades correspondientes, con fin de que el juez constitucional disponga la protección de su derecho fundamental de petición en los términos del artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991<sup>9</sup>; y
- (iii) Se archivarán los procedimientos de SDP respectivos ante el agotamiento de las fases reglamentarias de los mismos.

RESUELVE

**PRIMERO.- REMITIR** copias de las siguientes diligencias de Supervigilancia al Derecho de Petición (SDP) a las entidades correspondientes para que, por medio de los canales institucionales respectivos, sean asignadas a las dependencias competentes para iniciar las acciones disciplinarias y/o administrativas a las que haya lugar, según lo dispone el artículo 31 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo:

No .	SDP	Número radicado	Peticionario	Entidad	Autoridad Destinataria
1.	1846-24	E-2024-538217; CORREO ELECTRONIC O (E-2024-668114); CORREO ELECTRONIC O 28/11/2024 ( E-2024-723931)	Sergio Iván Linares Corzo	Cooperativa Multiactiva de Servicios Integrales Gestionar Bienestar	Superintendencia de Economía Solidaria

**SEGUNDO.- INFORMAR** a los peticionarios relacionados en el numeral primero que tienen la posibilidad de interponer acciones de tutela en contra de las entidades correspondientes, con fin de que el juez constitucional disponga la protección de su derecho fundamental de petición en los términos del artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991.

**TERCERO.-** Por intermedio del Grupo Especial de Supervigilancia al Derecho de Petición, **REMÍTASE**, vía correo electrónico, a las entidades y a los peticionarios relacionados en la numeral primero copia del presente auto.

<sup>9</sup> Cfr. Corte Constitucional, Sentencias T-260 de 2002 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra), T-192 de 2007 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), T-165 de 2017 (M.P. Alejandro Linares Cantillo) y T-426 de 2016 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado).



**PROCURADURIA  
GENERAL DE LA NACION**

**CUARTO.- ARCHIVAR** por medio de los sistemas electrónicos de la entidad, las diligencias de Supervigilancia al Derecho de Petición relacionadas en el numeral primero ante el agotamiento de las fases reglamentarias de los mismos.

**QUINTO.- ADVERTIR** a los interesados que contra este auto no procede recurso alguno.

Comuníquese y cúmplase,

**JUAN SEBASTIÁN VEGA RODRÍGUEZ**

Procurador Auxiliar para Asuntos Constitucionales

Elaboró: Marlon Adrian Rodríguez Jaimes - Grupo Especial de Supervigilancia al Derecho de Petición  
Aprobó: Luis Esteban Monroy Granados – Coordinador del Grupo Especial de Supervigilancia al Derecho de Petición